

LOS JÓVENES EN UN NUEVO PROYECTO DE NACIÓN

HIPÓLITO RODRÍGUEZ*

Para comprender los desafíos que enfrentan los jóvenes mexicanos de hoy, es preciso reconocer la complejidad de la sociedad que emerge después de tres décadas y media de políticas económicas neoliberales, y entender cómo se han configurado nuevas formas de escasez, nuevas carencias y limitaciones en los campos donde se pretende que el joven construya un porvenir: educación, trabajo, salud, cultura y ciudadanía.

En la juventud se proyectan los principales problemas del orden social; la miseria del tiempo presente adquiere en los jóvenes un sentido preciso: la erosión del futuro. La reflexión en torno a lo que puede ser un proyecto de desarrollo encuentra en el examen de la problemática juvenil un acicate para incidir ya en la prefiguración del porvenir. Los jóvenes están experimentando desde hace años una acumulación de rezagos a los cuales es preciso enfrentar de forma perentoria. La crisis económica que afecta a nuestra región en los últimos años ha acentuado las dificultades de acceso a instituciones clave para su desarrollo. La precarización del mercado de trabajo, la compleja situación de inseguridad y el creciente deterioro ambiental exigen adoptar medidas radicales.

El surgimiento de un movimiento como #YoSoy132 indica que entre los rezagos que la juventud mexicana precisa enfrentar también figuran los límites que el sistema político pone a la participación libre e informada de las nuevas generaciones. La manipulación de la opinión pública que los medios masivos de comunicación hicieron a lo largo del proceso electoral del año 2012, instalando en la percepción política del ciudadano común la idea del triunfo inevitable de un candidato, al cual promovieron con diversos mecanismos publicitarios a fin de propiciar el desánimo y abatir la

* Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.

participación, pudo ser contrarrestada precisamente por la movilización de los jóvenes, que buscaron frenar el deterioro del sistema democrático mediante la apertura de nuevos canales de información y reflexión política, y la denuncia de la resignación y la banalidad que destilan los monopolios que controlan la televisión. Colocar en la agenda política la discusión de las alternativas que en verdad puede abrir un nuevo horizonte de oportunidades para los jóvenes, es uno de los logros de ese movimiento.

Los jóvenes son particularmente sensibles al deterioro económico. La estructura de oportunidades se ha restringido: la escuela y el trabajo han dejado de tener puertas abiertas para ellos. Al mundo de la pobreza y la exclusión se han sumado más jóvenes con las crisis que el país viene padeciendo desde 1994. Sin oportunidades de empleo, la emigración a Estados Unidos se ha convertido en una válvula de escape, un torrente cada día más difícil de contener por parte de aquellos que pretenden taponar el flujo.

En el año 2015, de acuerdo con la Encuesta Intercensal de INEGI, residen en nuestro país poco más de 30.6 millones de personas con edades que van de los 15 a los 29 años (INEGI, 2015). En total, los jóvenes constituyen hoy poco más de la cuarta parte de la población total del país (119.5 millones). Ese porcentaje disminuirá en los años que vienen a causa de la transición demográfica (caída de los niveles de fecundidad); según CONAPO, en el año 2030, la población joven se reducirá a 13.6% del total y en la sociedad mexicana tendrán un peso mayor las poblaciones de más edad.

En el curso de los próximos años (2018-2030), el país tendrá una cantidad inédita de personas en edad productiva (entre 15 y 64 años) que duplicará a la población dependiente de ella (0 a 14 años y mayor de 65 años). Esto es lo que ha dado en llamarse bono demográfico. Sin embargo, para “aprovechar” ese bono sería indispensable crear las condiciones sociales y económicas necesarias para integrar a los jóvenes de hoy en el sistema educativo y en el mercado laboral. De lo contrario, en el futuro estas poblaciones padecerán el efecto de su actual exclusión.

La incorporación al mercado de trabajo es una transición clave en la biografía de los jóvenes. Conseguir un empleo implica un paso fundamental hacia la emancipación y la autonomía respecto del hogar de origen. Sin embargo, todo el mundo sabe que el ingreso al mundo del trabajo ocurre en nuestros días en condiciones de enorme precariedad. El estancamiento que padece la economía nacional desde hace años ha dificultado la generación de nuevos empleos. Según la CEPAL, durante los años noventa, siete de cada diez empleos se generaron en el sector informal, con lo cual devenir trabajador se ha vuelto sinónimo de caer en la vulnerabilidad, pues el empleo informal tiene como principales atributos la inestabilidad, horarios de trabajo nocivos, ausencia de prestaciones sociales (salud, pensión,

crédito) y bajos salarios. La informalidad, que antes era una opción restringida a los sectores que estaban fuera del canal central del desarrollo, se está haciendo extensiva a todos los sectores. Para cumplir con el ideal de competitividad, la mayor parte de las economías del mundo está impulsando medidas de desregulación de las normas del mercado y del proceso laboral, lo cual está llevando a una situación que creíamos superada: *una economía política de la inseguridad* (Altvater y Mahnkopf, 2008). Bajo el signo de la flexibilización, los trabajadores, adultos y jóvenes ven deteriorarse las posibilidades de obtener lo que la OIT llama un empleo *decente*.

Poseer un empleo remunerado y estable es un elemento fundamental e irrenunciable de la seguridad socioeconómica. Esta clase de seguridad es hoy inalcanzable para la mayor parte de la juventud. Sin embargo, es preciso cambiar esta situación si queremos abatir la desigualdad y la exclusión. La debilidad de las organizaciones de los trabajadores y del propio Estado permite la existencia de condiciones precarias, incluso en el sector formal, donde también se pagan sueldos de hambre y se regatean las prestaciones.

Los que más padecen esta situación son los jóvenes. Los mayores índices de desocupación e informalidad se encuentran entre ellos, pues no tienen opciones para integrarse a un empleo estable. La trayectoria laboral de los jóvenes de hoy es muy diferente a la que tuvieron sus padres: la estructura de oportunidades se ha modificado. El papel de las instituciones sociales que proporcionan equidad en la competencia por posiciones ocupacionales (los subsidios al consumo de las clases bajas, los servicios sociales de educación, salud y urbanos) es cada vez más débil dentro del sistema de movilidad social en México (Cortés y Escobar, 2007).

Ante un escenario de estancamiento, los jóvenes tienen dos opciones: postergar la entrada al mercado de trabajo, prolongando los años de formación (sin garantía de que las nuevas capacidades les abran nuevas oportunidades de empleo), o ingresar de forma precoz al mundo del trabajo, generalmente en la economía informal, con todo lo que ello implica en cuanto a inseguridad. El hogar de origen delimita la elección de una de estas dos opciones: para perseverar en el mundo educativo es preciso contar con el apoyo familiar; ingresar a temprana edad en el mercado de trabajo es fruto de la escasez de ingresos bajo la cual viven los hogares pobres. Esta situación contribuye a la reproducción intergeneracional de la pobreza.

Al examinar la problemática de los derechos laborales, los jóvenes mexicanos propusieron una legislación específica para cuidar las necesidades de aquellos que se ven obligados a trabajar muy pronto.¹ A su juicio, los

¹ “Los derechos de los jóvenes”, CIESAS/IMJ, 2009, disponible en <<http://cendoc.imjuventud.gob.mx/investigacion/publicaciones.html>>.

adolescentes, jóvenes que no han cumplido los 18 años de edad, están siendo empleados por todo tipo de empresas sin que se les procuren condiciones apropiadas de trabajo.

Los empleadores abusan de los jóvenes trabajadores en varios sentidos. Por un lado, porque no se les ofrecen servicios de salud. Por otro, porque no se les paga el mínimo establecido por la ley: hacen el mismo esfuerzo que una persona de más edad, pero se les remunera con menos salario. De hecho, por eso los empleadores los prefieren: saben que pueden ofrecerles menores salarios (no tienen que sostener a una familia) y se les niegan prestaciones que a otros trabajadores se les brindan: no sólo seguro médico, sino también aguinaldo, préstamos, vacaciones, capacitación.

La problemática que enfrentan los jóvenes rurales les coloca en una situación de mayor vulnerabilidad. Cuentan con menos oportunidades para proseguir sus estudios (en el campo no hay equipamiento educativo) y, al mismo tiempo, enfrentan más presiones para incorporarse al trabajo agrícola, que suele recibir muy bajas remuneraciones. El contraste con los jóvenes urbanos es notable: de acuerdo con cifras del INEE, en 2015, 90 de cada 100 niños y niñas de 12 a 14 años de localidades rurales (de menos de 2 500 habitantes) asistieron a la escuela, mientras que en localidades urbanas de 15 mil o más habitantes fue del 95%. Para los de 15 a 17 años, los porcentajes se redujeron a 63 de cada 100 residentes de las áreas rurales, y a 78% para los ubicados en localidades de 15 mil o más habitantes. La mayor parte de la matrícula de educación media superior, casi 4.4 millones de alumnos (equivalente a 88% del total), acude a planteles ubicados en localidades urbanas (de 2 500 habitantes y más), mientras que a las localidades rurales asisten sólo cerca de 600 mil alumnos, en aproximadamente 40% del total de los planteles (INEE, 2017). Aunque el número de jóvenes rurales que estudia ha crecido en los últimos años, las desventajas que enfrentan son todavía considerables, y para superarlas se requiere una mayor intervención del Estado. Su ingreso precoz al mundo del trabajo cancela la posibilidad de ampliar y diversificar sus capacidades laborales a través de la educación, orillándolos a permanecer en un universo de escasa productividad y bajos ingresos. Una formación escolar apropiada a las necesidades del mundo en el que viven permitiría mejorar sus ingresos e incrementar la productividad y valorizar el conocimiento campesino. De este modo podría romperse el círculo vicioso que hace que los hogares campesinos no apuesten por ampliar la escolaridad de sus hijos, ya que no perciben ninguna ventaja en ello.

Las diferencias de género juegan también un papel importante. Las mujeres jóvenes presentan tasas de participación económica más bajas que los hombres y sus niveles de desempleo son más altos. En todos los casos, a pesar de hacer las mismas cosas, sus ingresos son inferiores. La discrimi-

nación de género constituye un factor que propicia desigualdad y exclusión, colocando a las mujeres en una posición subalterna y dependiente. Suele ocurrir que sus empleos se realicen en el sector de servicios y el comercio, donde desempeñan labores que prolongan sus tareas domésticas, es decir, actividades poco calificadas y mal remuneradas. Aun cuando en los últimos años la escolaridad de las mujeres ha observado notables progresos, su situación laboral poco ha mejorado. El notable incremento del número de mujeres jóvenes en el mundo de las manufacturas, bajo el impulso de la industria maquiladora, ha puesto de relieve que los empleadores abusan de la disponibilidad de estas mujeres para aceptar empleos de escasa estabilidad y bajas remuneraciones.

Los niveles de remuneración de la mayor parte de los jóvenes suelen ser bajos. Al primer trimestre de 2018, 27% de los jóvenes entre 15 y 29 años, recibían hasta un salario mínimo (INEGI, 2018), lo cual exhibe la vulnerabilidad en que se colocan al abandonar sus estudios y apostar por una incorporación temprana al mundo del trabajo.

Un componente fundamental del empleo formal es, junto con la estabilidad en la percepción del ingreso, el conjunto de prestaciones laborales que brinda. Sin embargo, en 2015, el 56.02% de la población ocupada carecen de prestaciones y acceso a servicios de salud, y 34.77% cuentan con acceso a servicios de salud y otras prestaciones (CONAPO, 2015).

Si bien la educación contribuye a incrementar los niveles de ingreso de los jóvenes, el problema es que la educación no está respondiendo adecuadamente a las necesidades del mundo laboral. De ahí que los jóvenes estén señalando la necesidad de que se cuide la articulación entre los contenidos educativos y las demandas que plantean la sociedad contemporánea y el mercado de trabajo. En algunos contextos, la formación que reciben resulta inservible para atender los requerimientos de los empleadores. Esto contribuye a generar deserción: los jóvenes no le encuentran utilidad a la formación que reciben.

La reestructuración de las oportunidades de acceso a la educación debe contemplarse desde dos ángulos: desde el lado de la capacidad del sistema educativo para absorber la demanda y desde el lado de la calidad de las opciones educativas disponibles. Proteger el derecho de los jóvenes a una educación de calidad implica invertir más recursos para atender las demandas de toda la juventud que requiere seguir estudiando, e implica analizar la distribución geográfica del gasto público en educación, el cual se concentra en la capital y en las principales metrópolis del país.²

² La necesidad de contar con más recursos para la educación exige por lo demás una reestructuración del sistema fiscal que impera en México. Como bien apunta José Antonio Aguilar

Sobre esta problemática incide igualmente la exigencia de contar con programas de becas que funcionen con transparencia y rendición de cuentas. Una queja frecuente es que los apoyos se conceden de modo arbitrario: no se conceden por méritos o por situación socioeconómica, sino por favoritismo, por vínculos con grupos políticos. De ahí la propuesta de crear mecanismos ciudadanos que vigilen los procedimientos de asignación de las becas: instituciones civiles que supervisen que los apoyos se entreguen a quien verdaderamente los necesita y evalúen periódicamente la equidad en el apoyo a los estudiantes.

De la misma manera, se propone que el acceso al sistema educativo (el ingreso a las universidades, tecnológico y normal) sea vigilado por mecanismos que garanticen la presencia de criterios académicos para evitar el manejo discrecional y arbitrario de las oportunidades de educación. Sin reglas y procedimientos claros, los apoyos para hacer de la educación un instrumento de movilidad e integración social dejan de distribuirse de modo equitativo. Sin acceso al sistema educativo, para los estratos sociales más pobres, el mundo del trabajo deviene entonces un espacio con más restricciones.

La desigualdad que prevalece en la sociedad actual se manifiesta en los tiempos diferentes en que los jóvenes de los diversos estratos sociales pueden acceder a responsabilidades clave: unión conyugal, nacimiento del primer hijo, abandono del hogar de origen, salida del sistema educativo, ingreso al mercado de trabajo. Los estratos altos y medios postergan estos acontecimientos en su ciclo de vida, pero los estratos pobres los consuman de forma precoz, cancelando la posibilidad de educarse y adquirir capacidades para ingresar en mejores condiciones a la esfera laboral. Se trata de una reproducción intergeneracional de la desigualdad, un proceso que contribuye a una profundización de la fractura social (Rodríguez, 2003). Las transiciones tempranas se asocian con desventajas previas. Los jóvenes provenientes de hogares desfavorecidos permanecen menos tiempo en la escuela, reciben una educación de menor calidad, y acceden a trabajos más precarios y peor remunerados (Saraví, 2009).

Sin embargo, para revertir esta situación, no se trata sólo de ofrecer más tiempo de escuela, como si éste fuese un ámbito de protección contra la maternidad precoz. Es preciso considerar a la escuela no sólo como un espacio clave en la construcción de capacidades útiles para la inserción

Rivera (2006:110), citando a Przeworski, en las sociedades sumamente desiguales, el Estado, cualquiera que sea su estructura institucional, sencillamente es demasiado pobre para hacer valer la ley de manera universal. Ninguna reforma del Estado es suficiente para proteger los derechos republicanos para todos, puesto que el Estado no tiene los recursos para proteger y promover estos derechos. El impedimento es fiscal, no institucional.

productiva, sino también como un espacio fundamental en la construcción de ciudadanía, cultura y autonomía (emocional). Si no se toma en cuenta esto, puede darse el fracaso de la escuela como espacio de integración y construcción de opciones vitales. De alguna manera, se ha construido una percepción de la escuela como un mecanismo que se limita a asignar más valor económico a las personas, descuidando sus otras funciones, como espacio de producción de conocimientos para la vida social de calidad (ciudadanía, sustentabilidad, solidaridad, ética). Si se le contempla sólo como mecanismo económico, la escuela pierde ante opciones rivales: migración, delincuencia, informalidad, es decir, alternativas que se traducen rápidamente en ingresos monetarios para los jóvenes que buscan soluciones a corto plazo.

El contexto sociocultural ha favorecido estas opciones utilitarias: volverse proveedor y generador de ingresos, acceder al consumismo. De ahí que el trabajo (sea como asalariado o como autoempleado) aparezca como una opción más valiosa y rápida que la educación: como un mecanismo que ofrece resultados inmediatos. Sin embargo, todos sabemos que el trabajo disponible para los jóvenes suele ocurrir en los marcos de la informalidad, donde predominan la precariedad, la inestabilidad, los bajos ingresos, es decir, opciones que cierran la posibilidad de la movilidad social. Ahí suelen muchos jóvenes quedar atrapados. Para los estratos populares, el ingreso precoz al trabajo puede entonces resultar una trampa, porque ahí quedarán anclados, sin posibilidad en el futuro de mejorar sus niveles de ingreso, perpetuando de alguna manera las desventajas de origen. Esto es lo que alimenta el desencanto.

Asistimos entonces a la crisis de dos instituciones clave en el proceso de integración y movilidad social: la escuela y el trabajo han dejado de ser para vastos conjuntos sociales vehículos de incorporación e inserción. Se han erosionado las expectativas de que la escuela pueda ofrecer canales de ascenso social y económico. En la actualidad el sistema escolar es percibido como un canal incierto para ese propósito utilitario, y su aquilatación como espacio de formación humanista y ciudadana ha sido subestimado, cancelado, olvidado. El reduccionismo economicista no alcanza a ver las consecuencias de la pérdida de este poderoso instrumento de integración y promoción de la articulación social (Kaztman, 2001), por ello ha subrayado el papel de la escuela pública como un territorio donde se forjan espacios de convivencia, solidaridad, redes de comunicación y apoyo entre diversos estratos sociales. Se trata del mejor antídoto a la proliferación de opciones como la criminalidad y las diversas formas en que se manifiesta la fractura del tejido social.

Si no se concibe a la escuela como parte de un proceso de integración, queda como un espacio disminuido, con una mínima capacidad de interpelación a los jóvenes menos favorecidos (Saraví, 2009). Entonces el mercado de trabajo se constituye como el complemento preciso de ese espacio educativo desvalorizado. En el capitalismo neoliberal, el mercado de trabajo es dinámico en la creación de empleos precarios, de escasa calificación y con bajas remuneraciones: opciones de inserción que muy pronto agotan la posibilidad de mejoría en los ingresos. En esta dinámica, trabajo y escuela apuran la sensación de desilusión, la pérdida de expectativas; ambas alimentan la reproducción, profundización y consolidación de la desigualdad.

En esta perspectiva, otros espacios proveedores de sentido, como la unión conyugal y la migración, ganan presencia frente a la erosión de los espacios del trabajo y la escuela. La maternidad y la migración se configuran entonces como opciones que gozan de prestigio y reconocimiento social. En los últimos años se han convertido en espacios de transición a la vida adulta tan importantes como lo eran antaño la educación y el trabajo.

En el campo de las opciones disponibles, la migración se ha configurado como una alternativa para los jóvenes: de acuerdo con cifras de la Encuesta Intercensal 2015, el 4.1% de la población de entre 15 y 29 años es migrante interna. Y según datos de la ENADID 2014, 47.7% de los migrantes internacionales salieron de México cuando tenían entre 15 y 29 años (INEGI, 2016).

La carrera en espacios ilegales, como el narcotráfico, también aparece como una ruta de transición para amplios estratos sociales. Nuevos ritos de paso ganan reputación entre la juventud desposeída de los referentes tradicionales.³

La crisis de la escuela resulta de estos dos factores: un marco de oportunidades obsoleto (a quién sirve la educación formal, pregunta Iván Illich) y una estructura socioeconómica que desvaloriza el conocimiento (ingenieros que acaban de choferes, médicos que terminan como comerciantes, arquitectos que se dedican a todo menos a construir). La creciente erosión de las expectativas que ofrece el sistema educativo, corre paralela a la ascendente informalización del mundo laboral. La educación parece desvincularse de las necesidades efectivas de la vida económica y al mismo tiempo no prepara para el futuro: ¿cómo vamos a encarar los problemas asociados

³ La debilidad del Estado incide en esta dinámica de manera dramática y pone en cuestión las opciones adoptadas para atacarla. No se trata de llenar de policías las calles y colonias de las ciudades, lo cual sólo contribuye a acentuar el orden autoritario, sino de fortalecer el tejido social, auspiciando opciones de integración y participación ciudadana.

al cambio climático, a los desafíos que plantea la sustentabilidad en nuestros espacios de vida local?

Al cabo de tres décadas de capitalismo neoliberal, experimentamos una creciente desigualdad. La fragmentación del espacio social que resulta de la polarización de las oportunidades de empleo y educación está suscitando una mayor desintegración. Esto es lo que está ocurriendo en el espacio público urbano. Según Duhau y Giglia (2008), en las grandes ciudades el espacio público ha dejado de ser un espacio de convivencia y cohabitación, y se ha convertido en un territorio donde se produce la privatización de los espacios de uso público y la segmentación social del público, o más bien, de los públicos congregados en diferentes lugares. Por un lado, los lugares frecuentados por las clases medias y acomodadas suelen ser ahora sobre todo lugares de gestión privada (como los centros comerciales) o, al menos, lugares donde el público asistente es socialmente filtrado por mecanismos de autoexclusión, derivados del hecho de sentirse fuera de lugar debido al modo de vestir, la apariencia física, los niveles de consumo, o lisa y llanamente mediante la aplicación de dispositivos explícitos de exclusión aplicados a ciertas categorías sociales (mendigos, vendedores ambulantes). Por otro lado, gran parte de los espacios jurídicamente públicos se abandonan a los pobres o, más en general, a las clases trabajadoras o populares, o en el límite, a los grupos marginales o las minorías étnicas. Los jóvenes no pueden escapar a esta diferenciación del espacio urbano que les excluye de la modernidad. La segregación espacial genera bolsones de pobreza, zonas donde se origina una estigmatización, una huella que convierte a un joven, sólo por provenir de un barrio pobre, en portador de marcas que le descalifican. El abuso por parte de los cuerpos policíacos en relación a los jóvenes provenientes de los barrios pobres de las ciudades mexicanas indica que la criminalización de la juventud sigue siendo un factor que lastima el estado de derecho en el país.⁴

Los jóvenes acumulan desventajas en la misma forma en que una región o un barrio pobre resienten quebrantos que agravan su rezago. La juventud de los estratos populares vive de modo creciente en condiciones de vulnerabilidad. Sin empleos seguros, sin educación que los capacite para incorporarse a nuevas oportunidades, sin espacios públicos donde formar su ciudadanía, se sumergen en situaciones de riesgo que pueden conducir a la exclusión social.

⁴ Lo que está en juego es también el sistema de justicia. La corrupción y la ineficacia lo caracterizan, pero en el caso de los jóvenes se añade el agravio de la adultocracia y un componente racista que lastima severamente a la juventud de los estratos populares. La justicia se vende al mejor postor y castiga al que no puede comprarla. Es el sistema de impartición de justicia el que requiere un cambio profundo, una reforma integral.

Ulrich Beck ha apuntado que en la sociedad actual lo que tenemos es una desigual distribución de los riesgos y de los recursos disponibles para enfrentarlos. Los jóvenes de los estratos populares conocen muy pronto los duros efectos de esta desigual asignación de riesgos y oportunidades. “Ellos son quienes deben enfrentar embarazos adolescentes, migraciones ilegales, una escuela sin sentido, trabajos precarios, estigmatizaciones sociales” (Saraví, 2009).

El contexto además ha evolucionado de tal manera que la desigualdad en los riesgos y la acumulación de ventajas se profundiza: el Estado, que podría ofrecer mecanismos para paliar la polarización social, cada vez tiene menos recursos. Cuando se presentan situaciones críticas, rupturas del tejido social, crisis familiares, desastres, enfermedades —episodios por los que todos podemos pasar—, entonces los mecanismos de solidaridad escasean y el desamparo y la fragilidad pueden conducir a la exclusión.

Para los jóvenes, el contorno social genera una vulnerabilidad que también afecta su acceso a las instituciones de salud. Los jóvenes saben que sólo disponen de sus servicios mientras estudian o, quizás, si sus padres poseen un empleo formal. Pero el problema se presenta cuando sus padres no tienen un empleo formal o cuando ellos han dejado de estudiar. Durante el lapso en que buscan empleo, o incluso cuando encuentran un empleo (precario), simplemente por ser jóvenes, su situación en este campo es vulnerable. Por ello, es necesaria la construcción de un sistema de salud universal para los jóvenes; un sistema, por otro lado, que sea de calidad, pues los servicios públicos suelen presentar múltiples deficiencias (largo tiempo de espera, carencias de medicamentos, de especialistas, ubicaciones inaccesibles).

La contrarrevolución cultural que inauguró el neoliberalismo incluyó no sólo el desregular el mercado, sino también el renacimiento de la moral conservadora en el plano sexual. Ante la negativa a brindar educación sexual, una propuesta fundamental consiste en no sólo transmitir conocimiento a los jóvenes, sino también a los padres y a los responsables de su educación, ya que la ausencia de educación sexual es un fenómeno que abarca a todo el conjunto social. Es necesario educar a los educadores. Mostrar la naturaleza de los peligros y deshacer mitos, supersticiones, prejuicios. En México, los jóvenes se inician a la vida sexual a una edad promedio de 16 años. Los jefes de familia deben estar conscientes de esta realidad y asumir esa información para tratar de forma madura el tema con sus hijos.

El respeto a la diversidad sexual constituye asimismo una problemática que preocupa a una parte de la juventud mexicana. Frente al machismo dominante y la normalidad heterosexual, las preferencias sexuales de los jóvenes disidentes suelen ocultarse y desplegarse en una clandestinidad

alimentada por la represión y la discriminación. Consideradas minorías sociales, las diversas alternativas de género suelen atravesar por situaciones de hostigamiento y censura que suele colocarlas en una situación de vulnerabilidad social y política, por lo que también en este campo se requiere de un cambio, un proceso de renovación cultural que promueva el respeto y el derecho a la diferencia.

La educación tiene un propósito: preparar para el futuro. Y debe generar rupturas; no continuar con una inercia, sino ofrecer conocimientos útiles para un escenario nuevo. La sustentabilidad empieza en la escuela y en ella se puede ensayar la construcción de nuevas instituciones. El deterioro ambiental exige adoptar nuevos patrones de producción y consumo. Es indispensable detener la pretensión de seguir por el camino del consumismo y el despilfarro de los recursos naturales. Frente a ello, crear es resistir, resistir es crear.

La violencia y la inseguridad que afectan a amplias regiones del territorio nacional indican que el costo social de una práctica de consumo y tráfico de drogas, ejercida por una minoría, es cada día mayor. Desafortunadamente, la ausencia de una oferta cultural alternativa, que muestre otras formas de diversión y recreación, también contribuye a generar un espacio vacío que suelen llenar las ofertas de estas sustancias. Por ende, no se trata sólo de construir campañas negativas, sino también de formular iniciativas más creativas en relación a las formas de construir un espacio de ocio atractivo y socialmente sano. En ese terreno, los medios de comunicación podrían jugar un papel importante, pues la programación que difunden no aporta referentes para orientar otras modalidades de diversión y más bien parecen difundir la idea de que las emociones se consiguen de modo instantáneo, sin esfuerzo ni reglas socialmente consensuadas.

En su conjunto, las opciones para superar estos escenarios —económicos, sociales, culturales— implican un cambio social, una reformulación de las atribuciones del Estado y de sus relaciones con la sociedad: un nuevo proyecto de nación. Una reformulación de las instituciones en la que el mercado también ha de conocer nuevas reglas, que permitan bajo el horizonte de las nuevas tecnologías un reparto más equitativo de las oportunidades de inserción, tanto en el plano de la producción como en el plano del consumo.

Como hemos visto, los problemas que más preocupan a la juventud se ubican notablemente en seis campos: la educación, el trabajo, la salud, la seguridad, la cultura y la equidad de género. En su conjunto, estas problemáticas definen el horizonte donde se construyen las demandas de los jóvenes por construir políticas (estrategias) que protejan sus oportunidades de desarrollo humano. Sin embargo, aun cuando se espera, en alguna medi-

da, que las políticas contribuyan a resolver estos problemas, la acumulación de rezagos y la ausencia de respuestas, o la naturaleza insuficiente de las mismas por parte de las instituciones vigentes, ha generado una atmósfera de desaliento y desconfianza entre los jóvenes, atmósfera que sólo una amplia movilización juvenil podrá despejar. ¿Qué hacer?

HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE ALTERNATIVAS

Nos hallamos ante la necesidad de revisar el campo político y conjugar políticas públicas para construir ciudadanía entre los jóvenes con políticas destinadas a abatir la pobreza (rezagos en desarrollo humano: educación, salud e ingresos monetarios por actividades laborales). Rossana Reguillo ha señalado que podrían reconocerse dos juventudes. La primera, “desconectada y desigual”, es esa juventud con escaso o nulo acceso a servicios de salud, educación y garantías laborales, que sólo cuenta con empleos en el sector informal. Sus reclamos se inscriben en una lógica absolutamente estructural, con aspiraciones elementales de justicia social y bienestar. La segunda es aquella juventud bien ubicada en lo que toca a la conectividad y el acceso a satisfactores fundamentales como educación y salud, pero que padece y percibe el atraso del sistema político como la causa determinante del deterioro social, laboral, ambiental y económico del país. Una política que busque neutralizar la brecha que separa a ambas juventudes, es una política que debe movilizar a ambos conjuntos. El movimiento #YoSoy132 puede considerarse como una manifestación incipiente pero prometedora de esa política. La formación de un espacio de encuentro entre jóvenes estudiantes de universidades públicas y privadas, provenientes de diferentes estratos socioeconómicos, que coordinan sus esfuerzos para romper con las estructuras que impiden el florecimiento de una auténtica democracia en el país, constituye una de las novedades más importantes en la historia de los procesos políticos que desde 1968 buscan romper con el autoritarismo y la corrupción en México. Su presencia señala la emergencia de un nuevo flujo social.

Bajo su impulso, podría atacarse de forma articulada la problemática (económica y política) que permite la reproducción de la pobreza y la desigualdad. En estas circunstancias, se hace patente la necesidad de articular las políticas dirigidas a la juventud considerando tres dimensiones básicas: educación, salud y trabajo. Si bien estos tres aspectos forman el núcleo de las políticas que buscan romper con los eslabones que dan continuidad al círculo de reproducción de la pobreza, hay otros que también son clave para que estas políticas tengan éxito: es indispensable acabar con la corrup-

ción, detener la inseguridad y poner un límite a la erosión de los espacios democráticos.

En esa tarea, es necesario tomar en todos los aspectos el acceso a la cultura y el arte, ya que ambos contribuyen a la formación de ciudadanía, transmitiendo experiencias y reflexiones que examinan los problemas éticos y sociales que enfrentan los jóvenes de todo el mundo, de cara a una sociedad que cambia y formula nuevos desafíos en relación a la justicia, la equidad de género, la defensa del entorno natural y la constitución de ciudadanos con derechos y responsabilidades.

La cultura y el arte inciden en los asuntos de los colectivos en los que la juventud se inserta, inculcando valores apropiados para el fortalecimiento de la democracia y la solidaridad. Romper con la apatía que afecta a diversos segmentos de la juventud actual implica revertir la desvalorización de la política y el pensamiento crítico, generar iniciativas que estimulen su interés en los asuntos públicos y que muestren la importancia de su participación para el mejoramiento de sus colectivos. Incentivar esta participación no tiene que ser necesariamente una carga carente de atractivos. Para los jóvenes el espacio público puede ser un ámbito en el cual se desarrollan actividades apasionantes. Su disposición a formar parte de colectivos y a trabajar por el bien común puede conjugarse con los procesos de apropiación y disfrute de diversos bienes culturales y artísticos.

En todo el mundo, ante las recurrentes crisis económicas y el creciente deterioro del espacio político (manipulación y coacción del voto, envilecimiento y corrupción de la clase política), surgen manifestaciones de desencanto y repudio. Si en España los Indignados gritan a los miembros de la clase política: “No nos representan”, en Estados Unidos el movimiento Ocupa Wall Street denuncia la corrupción y avaricia que propicia el capital financiero entre los integrantes de la misma. En nuestro país, los jóvenes denuncian el regreso del autoritarismo e impugnan la corrupción de los políticos y los medios de comunicación.

La esfera pública tiene como vehículo de difusión a diversos medios de comunicación, y algunos de ellos, gracias a las nuevas tecnologías, resultan particularmente atractivos. Hablamos no sólo de periódicos y revistas, sino también de programas de radio y televisión, cine e internet, medios de expresión que pueden seducir al público juvenil (teatro, conciertos, cómics) y difundir un mensaje que amplíe su conocimiento de alternativas para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de sus colectivos. El poder movilizador de las redes (Facebook, Twitter) figura en la actualidad como un instrumento clave de la participación entre los jóvenes. El uso creativo de estas redes por parte del movimiento #YoSoy132 indica que se trata de canales de formación ciudadana con gran potencial político: gracias a ellas

pudo ponerse en jaque a las empresas de televisión que contribuyen a sostener el orden autoritario en México.

En todo esto es importante reconocer la heterogeneidad juvenil. El acceso diferenciado a los bienes de consumo, a la educación y a las infraestructuras de comunicación que exigen configurar políticas diferenciadas—incluso con enfoques regionales— que contribuyan a allanar la desigualdad social.

Los desafíos que enfrenta la juventud señalan la necesidad de considerar su potencial de participación para replantear las opciones del desarrollo. Si los rezagos acumulados en el plano educativo son uno de los aspectos que más inciden en el déficit en desarrollo humano de los jóvenes, es muy importante diseñar políticas específicas para superar los diferentes niveles de atraso en educación básica presentes en el territorio nacional. En este sentido, en un programa de transición que busque mejorar la situación de los jóvenes, podrían implementarse medidas que tomen en cuenta la diversidad regional y que consideren algunos de los parámetros que la CEPAL recomienda en la construcción de políticas para la juventud:

- Incentivos para permanecer en la escuela como espacio de formación ciudadana. Es necesario modificar las estructuras de mercado para promover la educación y dotar a los establecimientos escolares de más recursos para la convivencia y la solidaridad.
- El sector informal es el camino al empleo para la mayoría de los jóvenes. Las políticas económicas deben promover normas que protejan los salarios iniciales de los jóvenes. Las reformas laborales deben garantizar el acceso a la salud y a la seguridad social. Se debe promover—vía programas de crédito, capacitación y compras de gobierno— la formación de micro y pequeños negocios de los jóvenes emprendedores.
- La reforma educativa no puede ser homogénea. Son cuestionables los programas de capacitación con ingredientes e instrucciones fijos y homogéneos. Los programas de gran escala no se ajustan a las necesidades de los jóvenes rurales, los participantes más jóvenes, a los estratos de bajos ingresos, y un aspecto fundamental, a las necesidades de las mujeres. Se necesitan además diseños educativos que promuevan un nuevo modelo de relación con la naturaleza (desarrollo sustentable) y un nuevo patrón energético.
- Es indispensable vincular las políticas para los jóvenes con los programas educativos, ambientales y laborales. La complementariedad de políticas y programas asegurará un impacto más eficaz y de largo plazo. Se debe estimular la investigación, el diálogo de políticas y la

formulación de proyectos piloto que ligen la reforma educativa con el desarrollo sustentable.

Es claro que todas estas iniciativas, orientadas a fortalecer los derechos de la juventud, no podrán prosperar sin un Estado con vocación política y capacidad económica para impulsarlas. Por eso, la participación de los jóvenes en la construcción de un horizonte político más democrático y una estructura económica más equitativa, que permita el ejercicio sin cortapisas de sus derechos civiles y sociales, es esencial.

BIBLIOGRAFÍA

- Aguilar Rivera, José Antonio (2006), “El capital social y el Estado, algunas aproximaciones al problema”, en *Pensar en México*, obra colectiva, México, Conaculta/FCE.
- Altvater, Elmar y Birgit Mahnkopf (2008), *La globalización de la inseguridad. Trabajo en negro, dinero sucio y política informal*, Buenos Aires, Paidós.
- CEPAL (2004), *Panorama social de América Latina 2004*, Santiago de Chile, CEPAL.
- CIESAS/IMJ (2009), “Los derechos de los jóvenes”, disponible en <<http://cendoc.imjuventud.gob.mx/investigacion/publicaciones.html>>.
- CONAPO (2010), *La situación actual de los jóvenes en México*, México.
- CONAPO (2013), *Proyecciones de Población Nacional 2010-2050*, México, disponible en <<http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones>>.
- CONAPO (2015), *Comunicado de prensa, 1 de mayo: Día del Trabajo*, México.
- Cortés, Fernando y Agustín Escobar (2007), “Modelos de acumulación de capital y movilidad social, un estudio en seis ciudades mexicanas”, en Fernando Cortés, Agustín Escobar y Patricio Solís (coords.), *Cambio estructural y movilidad social en México*, México, El Colegio de México.
- Duhau, Emilio y Angela Giglia (2008), *Las reglas del desorden: habitar la metrópoli*, México, UAM/Siglo XXI.
- INEE (2017), *La educación obligatoria en México. Informe 2017*, México.
- INEGI (2015), *Encuesta Intercensal*, consulta interactiva, disponible en <<http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/intercensal/>>, consultado en junio de 2018.
- INEGI (2016), *Estadísticas a propósito del... Día Internacional de la Juventud (15 a 29 años)*, 29 de agosto.
- INEGI (2018), *Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, consulta interactiva de datos al primer trimestre de 2018*, disponible en <

- inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/enoe/>, consultado en junio de 2018.
- Kaztman, Rubén (2001), “Seducidos y abandonados, el aislamiento social de los pobres urbanos”, en *Revista de la CEPAL*, núm. 75, Santiago de Chile, CEPAL.
- Prévôt-Schapiro, Marie-France (2001), “Fragmentación espacial y social: conceptos y realidades”, en *Perfiles Latinoamericanos*, vol. 10, núm. 19, México, Sede Académica de México de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
- Reguillo, Rossana (2001), “La gestión del futuro”, en *jóvenes, Revista de estudios sobre juventud*, nueva época, año 5, núm. 15, México.
- Rodríguez, Hipólito (2003), “Ser joven en Veracruz, nuevos horizontes, nuevos desafíos”, en *Jóvenes mexicanos del siglo XXI*, México, Encuesta Nacional de Juventud 2000, Instituto Mexicano de la Juventud.
- Saraví Gonzalo (2004), “Segregación urbana y espacio público, los jóvenes en enclaves de pobreza estructural”, en *Revista de la CEPAL*, núm. 83, Santiago de Chile, CEPAL.
- Saraví Gonzalo (2009), *Transiciones vulnerables, Juventud, desigualdad y exclusión en México*, México, CIESAS.

Los jóvenes de hoy: el desarrollo como recurso
volumen 18 de la colección
México: 2018-2024: Nueva estrategia de desarrollo,
coordinada por José Luis Calva,
se terminó en 2018
en Juan Pablos Editor, S.A.
2a. Cerrada de Belisario Domínguez 19
Col. del Carmen, Alcaldía de Coyoacán
México, 04100, Ciudad de México
<juanpabloseditor@gmail.com>





CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSITARIOS POR UNA NUEVA ESTRATEGIA DE DESARROLLO

OBJETIVOS

Primero: conjuntar nuestros esfuerzos para formular desde una perspectiva universitaria un sistema integral de propuestas viables de políticas públicas capaces de superar el pobre y errático desempeño mostrado por la economía mexicana durante las últimas décadas, fortalecer la cohesión social de nuestra nación y abrir los cauces de un desarrollo sustentable, incluyente, equitativo y democrático.

Segundo: contribuir de manera organizada a la formación de la conciencia ciudadana sobre la apremiante necesidad de que nuestro país adopte una nueva estrategia de desarrollo.

Tercero: contribuir a enriquecer el contenido y a elevar la calidad del debate político y social sobre los grandes problemas nacionales.

Estos objetivos los realizaremos con espíritu de servicio a la nación y visión de Estado, con plena independencia respecto a los partidos políticos.



9 786077 114819